



ANTECEDENTES

- I. El 08 de marzo de 2024, la Unidad de Transparencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso a información, y turnó a la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México registrada con el número de folio 3300244240000375:

"Solicito las versiones públicas en formato electrónico de los siguientes expedientes administrativos: PFPA/11.3/2C.27.3/0011-19, PFPA/30.3/27.3/0006-20, PFPA/30.3/27.3/0039-21, PFPA/30.3/27.3/40-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/00012-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00013-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00014-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00015-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00016-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00017-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00018-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00019-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00020-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00021-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00022-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00023-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00024-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00025-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00026-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00027-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00028-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00029-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00030-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00031-21, PFPA/39.2/2C.27.3/00014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/00015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/00016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/00017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/00018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/00019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/00020-22." (Sic)

- II. Mediante oficio **PFPA/39.1/12C.6/01460/24** de fecha 08 de abril de 2024, la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, informó a la Unidad de Transparencia lo siguiente:

"La documentación solicitada, de los expedientes administrativos números: **PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22**, mismos que actualmente se encuentran sustanciando, al estar en trámite, pendientes de determinación jurídica, por lo que aún se encuentran pendientes actividades de verificación, en atención a lo anterior, se solicita someter a consideración del Comité de Transparencia su clasificación como **RESERVADA**, por el periodo de 3 años.

Lo anterior, por encuadrarse en el supuesto establecido en el artículo 113 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 110 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por ello, en atención a lo ordenado en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, **se formula prueba de daño**, con el objeto de que sea valorada por el Comité de Transparencia.

PRUEBA DE DAÑO

Previo a entrar en análisis de prueba de daño, resulta importante contextualizar que los expedientes que se encuentran en el listado anterior, se encuentran en estudio de las actuaciones que lo integran para la sustanciación del procedimiento administrativo y emitir la resolución administrativa correspondiente, por lo tanto; proporcionar la información contenida en los mismos podría obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, derivado de las medidas que pudieran tomarse para que esta autoridad pueda allegarse de mayores elementos probatorios para sancionar cualquier hecho u omisión en materia de vida silvestre, por lo que debe considerarse como reservada por un periodo de **3 AÑOS**, es decir aún no ha causado estado.





No pasa desapercibido que, la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** prevé en el **artículo 6° apartado A, fracción I**, como principio para ejercer dicho derecho que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes de la unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, está protegida en los términos que fijen las leyes.

"Artículo 6.- (...)

...

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de **interés público** y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

(...)

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. "

Lo anterior, debido a que los documentos y datos antes señalados, se refieren a actuaciones realizadas dentro del procedimiento administrativo que, derivado de la visita de inspección realizada para verificar el cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable, se considera que encuadran con lo establecido en el artículos 110 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), para ser considerados como reservados:

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo II

De la Información Reservada

"**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;"

...

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo II

De la Información Reservada

"**Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;"

B

y





...

Es decir, de la transcripción de los preceptos mencionados se puede advertir que se considera **RESERVADA** toda aquella información que transgreda u obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, en el caso en particular las ambientales.

Cabe destacar que, el procedimiento de inspección de referencia se tramita ante esta autoridad administrativa ambiental, cuyo objetivo está limitado a vigilar y procurar el cumplimiento de la legislación y, en su caso, imponer sanciones administrativas que procedan o denunciar ante la autoridad correspondiente la posible comisión de un delito, por lo que aún está en trámite la determinación de diligencias por desahogar.

Al respecto, los **“Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas”**, contenidos y aprobados en el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, disponen lo siguiente:

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:

- I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
- II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
- III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y
- IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

De lo anterior se desprende que, dicha causal de reserva tiene como finalidad permitir que la autoridad verificadora realice las acciones de inspección o fiscalización, sin que el sujeto inspeccionado pueda alterar o modificar el escenario, objeto o circunstancias materia de fiscalización; es decir, que las labores de verificación de cumplimiento de las leyes se puedan llevar a cabo sin que el sujeto investigado o terceros puedan influir u obstruir el curso de la inspección, modificando los hechos, actos u omisiones a fiscalizar.

Por lo que, atendiendo lo dispuesto en el lineamiento **Vigésimo Cuarto** se advierte que:

PRIMERO: La información solicitada, de los expedientes administrativos números: **PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22**, mismos que están en substanciación por esta Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

SEGUNDO: Al momento de la presentación de la solicitud, los procedimientos administrativos, se encuentran en la etapa prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, relativo al estudio de los autos que integran los expedientes administrativos para la sustanciación de los procedimientos.



TERCERO: Tomando en consideración que la materia de la solicitud versa en tener acceso a la documentación que está siendo revisada por esta Procuraduría en los expedientes administrativos señalados y aquella generada con motivo de la substanciación de los mismos, respecto de los cuales aún no se han emitido la determinación correspondiente, es que resulta claro que existe un vínculo entre las documentales que integran los expedientes administrativos en cita y las actividades de inspección que lleva a cabo el sujeto obligado en el cumplimiento de la legislación ambiental.

CUARTO: Otorgar acceso a las documentales que integran los expedientes administrativos de que se tratan, así como los hechos u omisiones asentados en los actos de inspección, implicaría revelar información considerada como reservada, con lo que se obstruiría la investigación y las actividades de verificación al cumplimiento de las leyes ambientales que está llevando a cabo esta autoridad. Su divulgación podría entorpecer el cumplimiento de la legislación ambiental, toda vez que se pondría al alcance de terceros, quienes podrían implementar estrategias a efecto de sustraerse de las actividades de verificación o alterar el curso de las actividades de investigación.

Por otra parte, el artículo 111 de la LFTAIP prevé que las causales de reserva previstas en el artículo diverso 110 de la misma Ley, se deberán fundar y motivar mediante la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el numeral 104 de la LGTAIP, mismo que dispone lo siguiente:

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- I.** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
- II.** El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III.** La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio."

Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo citado, respecto a la aplicación de la prueba de daño es de señalar lo siguiente:

Con referencia a la **fracción I del artículo 104 de la LGTAIP**, es importante destacar que el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona, es un derecho humano consagrado por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y representa un "Derecho Social" en lo referente a su protección y restauración del equilibrio ecológico, independientemente de que las leyes que lo protegen son de orden público e interés social a partir del bien jurídico tutelado que se establece.

En este sentido, el publicar la información correspondiente a las constancias que obran en los expedientes en cuestión, representa un riesgo real ya que se podría vulnerar el normal desarrollo de los procedimientos al obstruir las actividades de verificación correspondiente en los procedimientos en los cuales, no se ha emitido la resolución que en derecho procede.

El riesgo demostrable es que, con la publicidad de la información de mérito, al darse a conocer las actuaciones de los expedientes administrativos citados, se podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho a la debida defensa.



Finalmente, el riesgo identificable es que esta autoridad al dar a conocer la información que se encuentran en los expedientes administrativos: **PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22**, que se encuentran pendientes de resolución y en consecuencia, **que aún no han causado estado**, se vería menoscabada su determinación, cuya finalidad fue la de salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona, el cual es significativo al interés público, toda vez que puede ser causal de impugnación por violentar el derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho a la debida defensa.

En lo relativo a **la fracción II del citado artículo 104, de la LGTAIP**, es importante reiterar que publicar las constancias y actuaciones del expediente administrativo señalado, conlleva un riesgo de perjuicio a la potestad que tiene esta autoridad para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente apropiado para el óptimo desarrollo y bienestar de la colectividad, consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, en lo referente a **la fracción III del artículo 104 de la LGTAIP**, la reserva de información temporal que realiza esta Unidad Administrativa, representa sin lugar a dudas el medio menos restrictivo para salvaguardar el derecho a un medio ambiente adecuado que tiene características difusas y colectivas y representan un interés superior y general frente al derecho a la información de un solo individuo, tomando en consideración que es una reserva temporal y no definitiva de la información.

Ahora bien, con relación a la aplicación de la prueba de daño establecida en los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", en el cual se dispone lo siguiente:

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

- I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;
- II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
- III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;
- IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
- V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y
- VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

En atención al mismo se manifiesta lo siguiente:

PRIMERO: En el caso que nos ocupa es la fracción **VI del Artículo 113** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vinculado con el Lineamiento Vigésimo



Cuarto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas."

SEGUNDO: Es importante reiterar que publicar las constancias y actuaciones de los expedientes administrativos que nos ocupan, conlleva un riesgo de perjuicio a la potestad que tiene esta autoridad para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente apropiado para el óptimo desarrollo y bienestar de la colectividad, consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO: Tomando en consideración que la materia de la solicitud versa en tener acceso a la documentación que está siendo revisada por la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, en los procedimientos de inspección y aquellas generadas con motivo de la sustanciación de los mismos, respecto de los cuales aún no se ha emitido la determinación correspondiente, es que resulta claro que existe un vínculo entre las documentales que integran los expedientes administrativos en cita y las actividades de inspección que lleva a cabo el sujeto obligado en el cumplimiento de la legislación ambiental.

CUARTO: El publicar la información correspondiente a las constancias que obran en los expedientes en cuestión, representa un riesgo real ya que se podría vulnerar el normal desarrollo de los expedientes administrativos que aún no ha causado estado y, que, por tal virtud, no se encuentra firme la determinación de esta autoridad.

El riesgo demostrable es que, con la publicidad de la información de mérito, al darse a conocer las actuaciones de los referidos expedientes, se podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho a la debida defensa.

Finalmente, el riesgo identificable es que esta autoridad al dar a conocer la información de los expedientes administrativos: **PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22**, vería menoscabada su determinación impuesta cuya finalidad es la de salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona, el cual es significativo al interés público, toda vez que puede ser causal de impugnación por violentar el derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho a la debida defensa.

QUINTO: Circunstancias de modo. Al darse a conocer la información correspondiente a los procedimientos de inspección, se causaría un daño a las determinaciones que esta autoridad tomará dentro del marco de sus atribuciones.

Circunstancias de tiempo: El daño sería en el presente, derivado de que los expedientes administrativos aún no han causado estado.

Circunstancias de lugar: El daño se causaría directamente a la substanciación de los procedimientos con expediente administrativo números: **PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22**, **PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22**, que lleva a cabo esta autoridad.

SEXTO: La reserva de información temporal que realiza esta Unidad Administrativa, representa sin lugar a duda el medio menos restrictivo para salvaguardar el derecho a un medio ambiente adecuado que tiene características difusas y colectivas, y representan un interés superior y general frente al derecho a la información de un solo individuo, tomando en consideración que es una reserva temporal y no definitiva de la información.



En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo ordenado en el artículo 101, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el lineamiento Trigésimo Cuarto de los multicitados Lineamientos, se solicita que sea sometido al Comité de Transparencia para su confirmación la reserva de la información solicitada por el periodo de **TRES AÑOS**, de acuerdo con los argumentos antes expuestos y de conformidad con los artículos 110, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." (Sic)

CONSIDERANDOS

- I. Que este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de información que realicen los Titulares de las Áreas de la PROFEPA, en los términos que establecen los artículos 65, fracción II, 102 y 140, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) (DOF 09-05-2016; última reforma DOF 27-01-2017); 44, fracción II, 103 y 137, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) (DOF 04-05-2015), así como el Lineamiento Vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública (DOF).
- II. Que el artículo 104 de la LGTAIP establece que, en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
 - I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
 - II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
 - III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
- III. Que los artículos 113, fracción VI de la LGTAIP y 110, fracción VI de la LFTAIP, establecen que se podrá clasificar como información reservada aquella que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones.
- IV. Que el Lineamiento Vigésimo cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (DOF), dispone que de conformidad con el artículo 113, fracción VI de la LGTAIP, podrá considerarse como información reservada, aquella obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:
 - I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
 - II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;
 - III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y
 - IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.
- V. Que el Lineamiento Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, establece que para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:



- I. Se deberá fundar la clasificación, al citar la fracción y la hipótesis de la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;
- II. Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o a la seguridad nacional;
- III. Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate;
- IV. Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda;
- V. Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes; y
- VI. En los casos en que se determine la clasificación total de la información, se deberán especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante.
- VI. Que de conformidad con lo ordenado en el artículo 101, segundo párrafo de la LGTAIP y el artículo 99, segundo párrafo de la LFTAIP, la información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. Adicionalmente, el lineamiento Trigésimo cuarto de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, señala que los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido. Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de reserva determinado, mismas que deberán estar relacionadas y sustentadas en la prueba de daño. Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.
- VII. Que en el oficio número **PFPA/39.1/12C.6/01460-2024**, la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, manifestó los motivos y fundamentos para considerar que los expedientes administrativos números: PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22, deben ser clasificado como reservado, manifestando lo siguiente:

"La documentación solicitada, de los expedientes administrativos números: **PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22**, mismos que actualmente se encuentran sustanciando, al estar en trámite, pendientes de determinación jurídica, por lo que aún se encuentran pendientes actividades de verificación, en atención a lo anterior, se solicita someter a consideración del Comité de Transparencia su clasificación como **RESERVADA**, por el periodo de 3 años.



Lo anterior, por encuadrarse en el supuesto establecido en el artículo 113 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 110 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por ello, en atención a lo ordenado en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, **se formula prueba de daño**, con el objeto de que sea valorada por el Comité de Transparencia.

Este Comité considera que la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México motivó y justificó la existencia de prueba de daño para las documentales integradas en los expedientes administrativos números: PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22, conforme a lo dispuesto en el numeral 104 de la LGTAIP, por los motivos y fundamentos que a continuación se detallan:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

“ Con referencia a la **fracción I del artículo 104 de la LGTAIP**, es importante destacar que el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona, es un derecho humano consagrado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y representa un “Derecho Social” en lo referente a su protección y restauración del equilibrio ecológico, independientemente de que las leyes que lo protegen son de orden público e interés social a partir del bien jurídico tutelado que se establece.

En este sentido, el publicar la información correspondiente a las constancias que obran en los expedientes en cuestión, representa un riesgo real ya que se podría vulnerar el normal desarrollo de los procedimientos al obstruir las actividades de verificación correspondiente en los procedimientos en los cuales, no se ha emitido la resolución que en derecho procede.

El riesgo demostrable es que, con la publicidad de la información de mérito, al darse a conocer las actuaciones de los expedientes administrativos citados, se podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho a la debida defensa.

Finalmente, el riesgo identificable es que esta autoridad al dar a conocer la información que se encuentran en los expedientes administrativos: **PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22**, que se encuentran pendientes de resolución y en consecuencia, **que aún no han causado estado**, se vería menoscabada su determinación, cuya finalidad fue la de salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona, el cual es significativo al interés público, toda vez que puede ser causal de impugnación por violentar el derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho a la debida defensa.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:





Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

"Debe rendirse el interés público de acceder a la información ante su protección en términos de esta causal de clasificación, con la finalidad de evitar cualquier injerencia externa que por mínima que sea, suponga que se altere la oportunidad de la autoridad investigadora de allegarse de elementos objetivos que acrediten posibles infracciones administrativas, comisión de delitos y la determinación de sanciones."

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

"La reserva de los documentos inmersos en el procedimiento de verificación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos lesivo para evitar un perjuicio a las actividades de inspección y vigilancia del sujeto obligado, pues el resguardar tales documentos permite que esta Autoridad ejercite sus atribuciones sin injerencias externas ni obstáculos que pongan en riesgo las actividades de investigación, inspección y vigilancia, cuestión que permite una mayor eficacia en tales acciones, además de que la reserva constituye una medida temporal en tanto se esclarecen los hechos motivo de investigación que está llevando a cabo."

VIII. Este Comité considera que la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México para los expedientes administrativos números: PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22; demostró los elementos previstos en el Lineamiento **Vigésimo cuarto** de los **Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas**, que quedaron acreditados como a continuación se indica:

I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

"PRIMERO: La información solicitada obra en los expedientes administrativos números: PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22, mismo que están en substanciación por esta Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México."

II.- Que el procedimiento se encuentre en trámite

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por conforme a lo siguiente:

"SEGUNDO: Al momento de la presentación de la solicitud, los procedimientos administrativos, se encuentra en la etapa prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, relativo al estudio de los autos que integran los expedientes administrativos para la sustanciación de los procedimientos administrativos."

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y





Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, conforme a lo siguiente:

"TERCERO: Tomando en consideración que la materia de la solicitud versa en tener acceso a la documentación que está siendo revisada por esta Procuraduría en el procedimiento administrativo señalado y aquella generada con motivo de la substanciación del mismo, respecto del cual aún no se han emitido la determinación correspondiente, es que resulta claro que existe un vínculo entre las documentales que integran el Procedimiento Administrativo en cita y las actividades de inspección que lleva a cabo el sujeto obligado en el cumplimiento de la legislación ambiental."

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

"CUARTO: Otorgar acceso a las documentales que integran el Procedimiento Administrativo de que se trata, así como los hechos u omisiones asentados en el acta de inspección, implicaría revelar información considerada como reservada, con lo que se obstruiría la investigación y las actividades de verificación al cumplimiento de las leyes ambientales que está llevando a cabo esta autoridad. Su divulgación podría entorpecer el cumplimiento de la legislación ambiental, toda vez que se pondría al alcance de terceros, quienes podrían implementar estrategias a efecto de sustraerse de las actividades de verificación o alterar el curso de las actividades de investigación."

IX. Por lo que respecta, a lo establecido en el lineamiento **Trigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, este Comité considera que se acreditan los extremos que dispone, en virtud de que la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México para los expedientes administrativos números: PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22; manifestó lo siguiente:

I. Se deberá fundar la clasificación, al citar la fracción y la hipótesis de la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada:

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

"...En el caso que nos ocupa es la fracción VI del Artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vinculado con el Lineamiento Vigésimo Cuarto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas"

II. Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o a la seguridad nacional.

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:



"...Tomando en consideración que la materia de la solicitud versa en tener acceso a la documentación que está siendo revisada por la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, en el procedimiento de inspección y aquellas generadas con motivo de la sustanciación del mismo, respecto del cual aún no se ha emitido la determinación correspondiente, es que resulta claro que existe un vínculo entre las documentales que integran los Procedimientos Administrativos en cita y las actividades de inspección que lleva a cabo el sujeto obligado en el cumplimiento de la legislación ambiental."

"...**Circunstancias de modo.** Al darse a conocer la información correspondiente a los procedimientos de inspección, se causaría un daño a las determinaciones que esta autoridad tomará dentro del marco de sus atribuciones.

Circunstancias de tiempo: El daño sería en el presente, derivado de que los procedimientos aún no han causado estado.

Circunstancias de lugar: El daño se causaría directamente a la substanciación de los procedimientos con expediente administrativo números: **PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22**, que lleva a cabo esta autoridad."

- III. Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate:

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

"..., el publicar la información correspondiente a las constancias que obran en los expedientes en cuestión, representa un riesgo real ya que se podría vulnerar el normal desarrollo de los procedimientos al obstruir las actividades de verificación correspondiente en los procedimientos en los cuales, no se ha emitido la resolución que en derecho procede."

- IV. Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda.

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

"...es importante reiterar que publicar las constancias y actuaciones del expediente administrativo que nos ocupa, conlleva un riesgo de perjuicio a la potestad que tiene esta autoridad para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente apropiado para el óptimo desarrollo y bienestar de la colectividad, consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

- V. Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes; y:

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, conforme a lo siguiente:



"...La reserva de información temporal que realiza esta Unidad Administrativa, representa sin lugar a dudas el medio menos restrictivo para salvaguardar el derecho a un medio ambiente adecuado que tiene características difusas y colectivas, y representan un interés superior y general frente al derecho a la información de un solo individuo, tomando en consideración que es una reserva temporal y no definitiva de la información."

- VI. En los casos en que se determine la clasificación total de la información, se deberán especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante:

Lo dispuesto en la fracción arriba indicada se justifica con lo manifestado por la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conforme a lo siguiente:

"...Cabe destacar que, el procedimiento de inspección y vigilancia de referencia se tramita ante esta autoridad administrativa ambiental, cuyo objetivo está limitado a vigilar y procurar el cumplimiento de la legislación y en su caso, imponer sanciones administrativas que procedan o denunciar ante la autoridad correspondiente la posible comisión de un delito, por lo que aún están pendientes diligencias que desahogar."

"...dicha causal de reserva tiene como finalidad permitir que la autoridad verificadora realice las acciones de inspección o fiscalización, sin que el sujeto inspeccionado pueda alterar o modificar el escenario, objeto o circunstancias materia de fiscalización; es decir, que las labores de verificación de cumplimiento de las leyes se puedan llevar a cabo sin que el sujeto investigado o terceros puedan influir u obstruir el curso de la inspección, modificando los hechos, actos u omisiones a fiscalizar."

- X. Que la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, mediante el oficio **PFPA/39.1/12C.6/01460-2024**, solicitó al Comité de Transparencia que la información relacionada con los expedientes administrativos números: PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22; permanezca con el carácter de reservada por el periodo de tres años, de acuerdo con los argumentos expuestos a lo largo de su oficio **PFPA/39.1/12C.6/01460-2024** y de conformidad con los artículos 110, fracción VI de la LFTAIP y 113, fracción VI de la LGTAIP;

Al respecto este Comité considera que es así por ser el plazo estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a su clasificación, salvaguardando el interés público protegido.

Por lo anterior, **este Comité estima procedente la reserva de la información** señalada en el Antecedente IV, sobre las documentales integradas en los expedientes administrativos números: PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22, en virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 113, fracción VI de la LGTAIP y el artículo 110, fracción VI de la LFTAIP, acorde a los elementos para la prueba de daño previstos en el artículo 104 de la LGTAIP y en los lineamientos Trigésimo tercero y vigésimo cuarto de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.*

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 113, fracción VI y 101 de la LGTAIP; 110, fracción VI y 99 de la LFTAIP, en relación con los Lineamientos vigésimo cuarto y trigésimo tercero de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se*

*B
y*

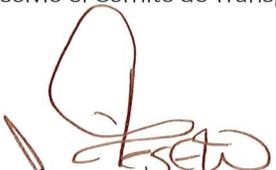




confirma la clasificación de la información como reservada, señalada en el Antecedente II relacionada con los expedientes administrativos números: PFPA/39.2/2C.27.3/0024-20, PFPA/39.2/2C.27.3/0014-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0015-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0016-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0017-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0018-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0019-22, PFPA/39.2/2C.27.3/0020-22, por los motivos mencionados en el oficio PFPA/39.1/12C.6/01460-2024 por parte de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México por el periodo de tres años o antes si desaparecen las causas que dieron origen a su clasificación.

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para notificar la presente Resolución a la Oficina de Representación de Protección Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como al solicitante, señalándole en el mismo acto su derecho a interponer Recurso de Revisión contra la misma en términos de los artículos 142 de la LGTAIP; y 147 de la LFTAIP ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia de la PROFEPA, el 22 de abril de 2024.


MAP. MARÍA ESTHER PRIETO GONZÁLEZ
Coordinadora de Archivos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.


C.P. JOSÉ GUADALUPE ARAGÓN MÉNDEZ
Titular del Área de Especialidad en Control Interno en el Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia de la Titular del Órgano Especializado en Control Interno de la Coordinación General de Órganos de Control y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública, en el Comité de Transparencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.


LIC. ELVIRA DEL CARMEN YÁÑEZ OROPEZA
Titular de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

